

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El primero (01) de junio de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **FREY MOLANO VARGAS** contra los señores **SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, MARÍA HORTENCIA VÁSQUEZ AGUDELO, LINA MARÍA ARISTIZÁBAL VÁSQUEZ Y SEBASTIÁN ARISTIZÁBAL VÁSQUEZ** y contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-009-2018-00547-01**.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, el demandante pretende se declare que entre él y los demandados, existió una relación de carácter laboral a término indefinido desde el 5 de enero de 2006 hasta el 17 de enero de 2017, terminada sin justa causa, y que, como consecuencia de ello, se les condene al pago de prestaciones sociales y vacaciones, la indemnización del artículo 65 de C.S.T., sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación de las cesantías, indemnización por despido injusto, pago de aportes a la seguridad social en pensiones durante toda la relación laboral, indexación de las condenas y costas procesales.

Y como pretensión consecuencial el pago de los aportes a la seguridad social, pretendiendo que se condene a Colpensiones a liquidar y recibir el valor correspondiente al cálculo actuarial.

**Como fundamento fáctico de sus pretensiones**, relata el actor que prestó sus servicios en forma subordinada a los codemandados mediante contrato de trabajo verbal a término indefinido del 5 de enero de 2006 hasta el 17 de enero de 2017, fecha en la que se le dio por terminado sin justa causa.

Señala que, durante la relación laboral, desempeño sus labores en el establecimiento de comercio ubicado en la dirección Calle 72 No.46-04, ocupando el cargo de soldador, devengado como última remuneración la suma de \$50.000 diarios, pagaderos de forma semanal para un promedio mensual de \$1'284.000.

Aduce que tenía un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., que las ordenes se las daban los demandados, quienes además le suministraba el uniforme e implementos de trabajo.

Manifiesta que, durante el vínculo laboral el empleador no le canceló las prestaciones sociales, ni lo afilió a la seguridad social, razón por la cual elevó un derecho de petición, dando repuesta el empleador indicándole que era cierto que había laborado a su favor mediante contrato de trabajo de obra o labor determinada, finiquitando la relación laboral el 16 de diciembre de 2016.

Por último, expone que elevó reclamación ante Colpensiones, encontrándose agotada la reclamación administrativa.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

La oficina judicial de la primera instancia despachó parcialmente favorable los pedimentos de la demanda, DECLARANDO que entre el señor FREY HERNÁN MOLANO VARGAS y el señor SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ se suscitaron 3 contratos de trabajo a término indefinido, entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de 2014, entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de 2015, y entre el 21 de septiembre y el 22 de diciembre de 2016.

Y como consecuencia de ello ordenó al señor SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, a tramitar, reconocer y pagar el respectivo cálculo o título actuarial como consecuencia del no pago de aportes al sistema de seguridad social en materia pensional y de salud, al demandante; ordenando como consecuencia de ello a COLPENSIONES que, una vez en firme la presente decisión, proceda a efectuar el respectivo cálculo actuarial frente a los aportes adeudados por el señor SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, y una vez efectuado el cálculo actuarial, dispone el demandado de un mes para su cancelación.

Asimismo, condenó a SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ a reconocer y pagar a título de indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del CST, la suma de \$22.981 diarios desde el 23 de diciembre de 2016 y hasta el momento que acredite la solución del pago de lo concerniente a los aportes al Sistema de Seguridad Social reconocidos.

Condenó en COSTAS a cargo del señor SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ las que fijó en el equivalente a TRES (3) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

El *a quo* fundó su decisión, en que conforme al artículo 23 del CST, hay 3 elementos que determinan la existencia del contrato de trabajo como lo son la prestación personal del servicio, que dicha prestación sea remunerada y la subordinación por parte del empleador, así mismo el artículo 24 del CST presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, y atendiendo aquella presunción la jurisprudencia de la CSJ releva de la practica probatoria al trabajador de demostrar el presupuesto de la subordinación, por lo que se invierte la carga de la prueba y es la parte demandada la que debe demostrar que aquella relación contractual fue de manera autónoma o corresponde a otro tipo de relación laboral.

Arguye que hay una confusión por parte del demandado, al dar a entender dentro del debate probatorio, que por el hecho de que se celebre un contrato por obra o labor contratada, aquel no está regido por un contrato de trabajo, sino por un contrato civil, sin embargo, existe una contradicción en el libelo contestatorio indicando que el demandante trabajo en los años 2014, 2015 y 2016 y le pagó prestaciones sociales, concluyendo el togado que en el presente caso sí existió una relación laboral y que está solo se dio con el señor Silvio Aristizábal, pues con los otros demandados se

configura una falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no se cumplen los elementos que determinan la existencia del contrato de trabajo, determinando que conforme al artículo 47 del CST, la modalidad del contrato fue a término indefinido.

Igualmente indicó el juez, que acorde con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral y de la Corte Constitucional, cuando hizo el análisis del artículo 24 del CST modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, en el que se expresó que no le basta con esa presunción al trabajador para dar por sentado el pago de las prestaciones propias del contrato de trabajo, sino que tendrá que demostrar los extremos de la relación laboral y lo relacionado con el salario, por lo que, en el presente caso el demandante tenía que acreditar el salario promedio percibido al encontrarse recibiendo un salario a destajo, estando éste sometido a una jornada de trabajo, así que en por de la protección del SMLMV, asumió que para efectos de las prestaciones económicas que sean reclamadas por el trabajador debió haber percibido el SMLMV durante el tiempo que prestó los servicios al señor Silvio, además que para los años 2014, 2015 y 2016 al demandante se le liquidó las prestaciones con el SMLMV.

En cuanto a los extremos laborales, expuso que el demandante señala que inició su vinculación el 5 enero de 2006 y que trabajó de manera continua y permanente hasta el 17 de enero de 2017, contrario sensu, el demandado indica que solo trabajo en los años 2014, 2015 y 2016 en las temporadas de septiembre a diciembre, así mismo lo manifestaron los testigos Gildardo de Jesús Mora Rueda y Gustavo Elías Restrepo Cárdenas, quienes fueron claros en señalar que el señor Frey trabajaba en las mismas condiciones que ellos, es decir desde el mes de septiembre a diciembre de cada año, por lo que con dichos elementos de prueba no queda acreditado en el proceso los extremos de la relación laboral como lo pretende el actor, y lo que demuestra la prueba aportada al litigio es que existieron varios contratos de trabajo, solo que se establece de forma concreta y por confesión de la parte demandada los últimos 3 contratos de trabajo que se suscitaron entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de 2014, el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de 2015 y entre el 21 de septiembre y el 22 de diciembre de 2016.

Respecto de los contratos que fueron objeto de reclamación se encuentra que la parte demandada indicó que sí pagó las prestaciones sociales de los años 2014, 2015 y 2016 adjunto los soportes de la liquidación de las prestaciones sociales como

auxilio a las cesantías, intereses a las cesantías, primas proporcionales y vacaciones; y no se discutió ni analizó como terminaron los contratos, sin embargo, las versiones brindadas por los señores Gildardo de Jesús Mora Rueda y Gustavo Elías Restrepo Cárdenas, es que una vez terminado el trabajo ellos se iban a buscar trabajo a otras partes, por lo que no quedó plenamente determinado como finiquitó ese último contrato en el año 2016 o 2017, siendo carga probatoria del actor, la cual no cumplió, por lo que no habría lugar al reconocimiento de la indemnización que pretende por fenecimiento unilateral por parte del empleador sin justa causa y respecto de las prestaciones sociales solo se estaría de cara a los 3 contratos suscitados en los años 2014, 2015 y 2016, frente a los cuales la parte demanda acredita la solución de las obligaciones que se generaron al menos entre los periodos acreditados que prestó los servicios el demandante de manera precisa, concisa y concreta.

Respecto de la pretensión relacionada con los aportes al sistema de seguridad social, adujo el juez, que verificada la existencia del vínculo contractual y establecido por los artículos 18, 19, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, que existiendo contrato de trabajo es obligación del empleador no solamente afiliar al trabajador, sino de pagar los respectivos aportes al sistema de seguridad social integral y que en el evento que aquellos no sean cancelados, este pagará incluso el porcentaje que está a cargo del trabajador, condenó al señor Silvio Aristizábal Gómez a pagar el respectivo cálculo actuarial correspondiente a los periodos 21 de septiembre al 22 de diciembre de 2016, del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2015 y del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2014, para dicho efecto COLPENSIONES deberá proceder a efectuar el respectivo cálculo actuarial y una vez notificado al señor Silvio Aristizábal tendrá un mes para realizar el efectivo pago.

Frente a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, argumentó el juez, que no están dados los presupuestos para su reconocimiento, acreditándose en el proceso que entre el demandante y el señor Silvio Aristizábal se suscitaron varios contratos de trabajo que tuvieron inicio y fin durante el mismo año, por lo que no se genera la obligación de reconocer y consignar el auxilio de cesantías en un fondo dispuesto.

En cuanto, a la sanción moratoria del artículo 65 del CST modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del 2002, señaló el despacho que atendiendo que al interior del proceso se verifica que durante y a la terminación del vínculo contractual, el empleador no cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social, tanto en pensión como en salud y demás emolumentos parafiscales, ha incurrido en mora en el pago de dichos aportes, por lo que se hace acreedor de la sanción moratoria prevista en dicha normatividad, en la medida que conforme a la jurisprudencia y en caso inverso a lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política, es decir partir del principio de la buena fe, ese precepto normativo parte de la mala fe, por lo que basta con acreditar las obligaciones que se generaron durante el vínculo contractual para efectos de imponer dicha sanción y que corresponde al empleador demostrar que existieron razones de peso para exonerar de tan drástica sanción y en el caso particular no se acreditó aquella circunstancia.

En relación con la sanción moratoria del artículo 65 del CST, señaló que no se aportaron elementos de juicio para determinar que el emperador actúo de buena fe al no efectuar lo aportes a la seguridad social en pensiones, por lo que ordenó el pago de un día de salario por día de retardo hasta el pago de la obligación.

### 3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La Sentencia fue apelada por los apoderados del actor y los demandados.

#### APELACIÓN DEL DEMANDANTE.

El apoderado del **demandante** apela la sentencia, solicitándole al Tribunal que al momento de resolver el recurso de alzada tenga en cuenta, **en primer lugar**, que se aparta de la sentencia únicamente en lo referido a **los extremos temporales y las consecuencias derivadas**, aduciendo que dentro del debate probatorio se citó al señor Silvio Aristizábal y a la señora Hortensia a rendir interrogatorio de parte, en donde se les solicitó que precisaran si conocían al demandante y si esté había laborado dentro del taller desde el año 2006, aceptando los declarantes esta afirmación como cierta. Asimismo, la declarante Sandra expuso la ciencia de su dicho y las razones de tiempo, modo y lugar con las cuales conoció al demandante, que si bien actualmente es su pareja sentimental para la época que relató que conocía de la situación, no se mantenía la misma, siendo clara en manifestar que el

demandante trabajó con el señor Silvio desde el año 2006 y que la labor la realizaba de manera continua. En cuanto a los testigos de la parte demandada Gustavo y Gildardo, estos manifestaron que trabajaban por temporadas o eventualmente en el taller, sin que tuvieran conocimiento de lo que pasaba en el taller durante los meses de enero a septiembre, por lo que mal conclusión puede llegar el fallador al establecer que estos tenían las mismas condiciones laborales que el demandante, cuando era cierto que el señor Frey trabajaba de manera continua al servicio del taller del señor Silvio en la fabricación del calzado, mientras que los señores Gustavo y Gildardo únicamente ocupaban un periodo de tiempo en temporada, sin que pueden dar certeza de que el demandante trabajaba durante los periodos restantes en el taller.

Arguye que los testimonios se notan alterados al momento de exponer su testimonio, al estar nerviosos, tensos y ser contradictorios en lo que expresan, teniendo presente unos nombres de empresas de donde el señor Frey ha laborado, pero cuando se les indaga por aspectos relevantes de la labor dentro del taller son confusos y no dan claridad al momento de exponer la situación, por lo que al existir una aceptación por parte de los demandados del vínculo que existió e incluso el juez lo expuso dentro de la sentencia desde el año 2005, no puede resultar entonces que con los dos testigos se establezca que únicamente fueron para los periodos trimestrales rendidos entre septiembre y diciembre de los años 2014 al 2016, por lo que reitera que con la prueba documental aportada con la demanda, especialmente el derecho de petición que formuló el demandante al señor Silvio se acepta el vínculo laboral desde el 2006. Es más cuando hacen la negación del hecho en la contestación de la demanda con relación a la fecha de inicio de la relación laboral, lo hacen de manera confusa por lo que esto no puede conllevar a la afectación de los derechos laborales del trabajador, pues es evidente y claro que en la relación laboral como lo dispuso el juez, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre las fechas que se reclaman en la demanda, por lo que en consecuencia existen una obligaciones prestacionales y salariales pendientes por cancelar, como serían las obligaciones causadas en dicho periodo hasta la fecha de terminación del vínculo.

Manifiesta que debe tenerse presente, que si bien fue formulada la excepción de prescripción dentro de dichos conceptos prestacionales que se le adeudan al demandante, existe un periodo con falta de pago. Además de ello existe una prestación social denominada cesantías que no tienen la característica de la

prescripción durante el tiempo en que se mantiene vigente la relación laboral, sino que está solo empieza a contar a partir del fenecimiento de la relación, por lo que si existen unas prestaciones sociales como las primas de servicios, cesantías e intereses a las cesantías no canceladas en vigencia de la relación laboral mediada por contrato a término indefinido verbal, entre el año 2006 al 2016.

Expone que eventualmente los pagos que se encontraron acreditados dentro del proceso deberán ser compensados, pero esto solo hacía referencia a unos periodos de septiembre a diciembre y no de la totalidad del año, como lo indicó la testigo del demandante, por lo que al existir una obligación que no fue cancelada oportunamente relativa a prestaciones sociales, es procedente aplicar la sanción establecida en el artículo 65 de CST, esto por el no pago oportuno a fecha de terminación del contrato de salarios y prestaciones sociales, a la cual debe sumarse el no pago oportuno de aportes a la seguridad social que se le adeudan al demandante.

También expone que las sanciones moratorias se encuentran acreditadas, en primer lugar el artículo 65 CST, y la establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de cesantías, pues al indicar que existió un contrato verbal del 2006 al 2016 no puede entenderse entonces que cada año con la liquidación parcial que efectivamente se evidencia en el plenario, se iban a cancelar las cesantías, pues esto es una obligación legal del empleador de cancelar las cesantías y realizar su consignación a las entidades encargadas a más tardar en febrero del año siguiente, y al demostrarse que el señor Silvio no procedió conforme a la Ley, es procedente condenar a dicha sanción.

Finalmente indica que se debe determinar que la terminación del contrato de su representado fue unilateral y sin justa causa por parte del empleador, lo que daría lugar al pago de la indemnización por esta prestación.

Por lo que solicita al Tribunal que disponga la confirmación de lo relativo con el cálculo actuarial y la sanción moratoria por no pago de aportes a la seguridad social de manera oportuna y se adicione la sentencia en relación con la condena de prestaciones sociales declarando la existencia del vínculo laboral a término indefinido desde las fechas que se reclaman en la demanda.



## **APELACIÓN DE LOS DEMANDADOS.**

El apoderado del demandando **SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ** y de los restantes codemandados, interpone recurso de apelación argumentando que el despacho condena en costas a la parte demandada señor Silvio, pero no condena en costas a la parte actora a la cual le fueron absueltos los otros codemandados, por lo que la sentencia debe ser adicionada en ese sentido. Adicionalmente indica que la condena en costas es muy alta en relación a las pretensiones prosperadas, solicitando que se revoque o modifiquen las mismas. Acto seguido, indica que no está conforme con la sanción del artículo 65 del CST, pues es claro que había que demostrar la buena fe del demandado y en el proceso la buena fe se encuentra demostrada, en el sentido que este al momento de terminar los respectivos contratos le liquidó todas las prestaciones sociales, además quedó demostrado dentro del proceso que están aportadas las liquidaciones que el demandante recibió, por lo tanto no hay mora en cuanto al pago de prestaciones sociales, por lo que operó la buena fe por parte del demandante al cancelarle lo correspondiente al periodo de los 3 meses en los que prestó los servicios, por lo que solicita que se revoque esta sanción.

### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, las apoderadas judiciales de las partes presentaron alegatos de conclusión, los cuales se transcriben en los siguientes términos:

### **ALEGATOS DE LOS DEMANDADOS.**

“...El Honorable Juez en la sentencia que se ataca, condena a mis mandantes al pago de los aportes al sistema de seguridad social, y así mismo condeno a mi mandante a reconocer y pagar a título de indemnización moratoria prevista por el art. 65 del C.S. DEL T., la suma de \$22.981 diarios, hasta el momento que acredite la solución de pago de lo concerniente a los aportes de seguridad social aquí reconocidos.

De acuerdo a este fallo se está cobrando doblemente el no pago de la seguridad social, ya que colpensiones una vez en firme la presente sentencia proceda a efectuar el respectivo calculo actuarial frente a los aportes, y es quien debe iniciar la

correspondiente demanda para su cobro, y para acabar de ajustar por el no pago de la seguridad social también lo viene a condenar a pagar una indemnización diaria, presentándose un doble cobro, lo que no es permitido por ley.

Ahora bien, el art. 65 del CS.DEL T., condena pagar una indemnización a favor del trabajador cuando a este no se le haya pagado sus prestaciones sociales, en el presente caso, se arrimaron las liquidaciones del pago de las prestaciones sociales al actor, las cuales no fueron tachadas de falsas, por consiguiente, no hay lugar a esta condena.

Por lo expuesto, le solicito muy comedidamente señor MAGISTRADO, se revoque la sentencia atacada, fallo este que haga gala de justicia y equidad ...”

#### **5. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:**

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer en primer lugar, cuáles fueron los extremos temporales probados en el proceso respecto del vínculo contractual que unió al demandante y al demandado Silvio Aristizábal Gómez, y en caso de resultar afirmativo, determinar si coinciden los extremos indicados por el a quo y analizar lo concerniente a las pretensiones sociales reclamadas en razón a ello. En segundo lugar, se estudiará si la terminación del contrato de trabajo fue sin justa causa atribuible al empleador, que dé lugar al pago de la indemnización regulada en el artículo 64 CST. En tercer lugar, se analizará lo concerniente a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, bajo el presupuesto de que el empleador siempre obro de buena fe durante la relación laboral. Y en cuarto y último lugar se revisará lo concerniente a las costas procesales.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

#### **6. CONSIDERACIONES:**

El análisis del caso versará sobre lo que es objeto del recurso de apelación atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Sea lo primero señalar que, en el caso en estudio, no es motivo de discusión e instancia la existencia de la relación laboral a término indefinido que se dio entre el señor Frey Molano Vargas y el demandado Silvio Aristizábal Gómez, siendo el primer punto objeto de análisis lo concerniente a los extremos de este vínculo laboral, en consideración a si se probó que la relación fue continua o si estuvo determinada por varias relaciones laborales independientes el en tiempo, a través de varios contratos de trabajos verbales a término indefinido, como lo determinó el *a quo*.

Y es que la parte actora aduce en la demanda y en la apelación, que se dio un único contrato con el demandado, el cual estuvo vigente desde el 6 de enero de 2006 hasta el 16 de enero de 2017, fecha última en la que el empleador sin mediar justa causa finalizó la relación laboral.

Así que, en lo que tiene que ver con los extremos temporales de la relación laboral, advierte la Sala que, en primer lugar, con respecto a la necesidad de la prueba de los extremos de la relación laboral y a quien corresponde la carga, desde de vieja data la CSL de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia fechada el 14 de junio de 1965, expresó:

*“La duración del contrato de trabajo es extremo de la acción, para efecto de los derechos reclamados por el trabajador, y su prueba completa y evidente corre a cargo del demandante, según los principios generales que informan el derecho probatorio. La duración en la prestación de los servicios es la base para el cálculo de las prestaciones que puedan corresponder al trabajador, tanto durante el desarrollo de la relación laboral como al término de la misma”* (cit. en “Jurisprudencia Laboral, 1961/1965, Jorge García Merlano, U. Externado de Colombia, pág. 205).

De esta manera, le corresponde al demandante probar los extremos temporales en que se produjo la relación laboral.

Al respecto, tenemos que sobre el extremo inicial que data del año 2006, pregona el demandante recurrente que este extremo fue confesado por el Señor Silvio Aristizábal y la señora Hortensia en sus interrogatorios de partes, encontrando esta colegiatura que respecto a esta afirmación le asiste razón parcialmente al apoderado del actor, ya que el demandado Aristizábal Gómez, en la audiencia de trámite y Juzgamiento dentro del cuestionario realizado en el minuto **023:32 y siguientes**, se le preguntó si era cierto que el señor Silvio laboró con él, desde el 5 de enero de 2006. A lo que respondió textualmente lo siguiente: “...pues él estuvo trabajando en

*el 2005 y 2006, un tiempo”, ...pero legalmente trabajo conmigo 14,15 y 16, porque él trabajaba en otros talleres”.*

Ahora en lo que corresponde al interrogatorio de parte surtido por la señora **MARÍA HORTENSIA VÁSQUEZ AGUDELO**, encontramos que ésta a lo largo de su declaración, contrario a lo expuesto por el apoderado del actor, no manifestó extremos temporales de la relación laboral, pues fue clara en indicar que no recordaba las fechas en que el demandante había laborado en el taller.

En cuanto a la testigo señora **SANDRA MILENA BARRERA PINEDA**, convocada por el demandante, expuso su apoderado en su recurso, que ésta testigo dejó claro los extremos de la relación laboral suscitada entre el señor Frey y Silvio, sin embargo encontramos que en su declaración la testigo manifestó que conoció a los sujetos procesales porque prestó sus servicios en el establecimiento Calzado HB de propiedad del señor Silvio Aristizábal, en el año 2008, así que no tuvo conocimiento directo del supuesto extremo inicial, que pregona el recurrente que fue en enero de 2006, y si bien dijo la citada deponente que la relación laboral del señor Frey inició antes de que ella entrara a la empresa, esta situación no la conoció de manera directa, sino por comentarios del demandante, quien en la actualidad es su compañero permanente, lo que la convierte en un testigo de oídas frente a este punto inicial del vínculo laboral, ya que no le consta de manera directa y presencial las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este supuesto extremo inicial del contrato.

Y si bien, la citada testigo indica que el contrato de trabajo existente entre el señor Frey y el señor Silvio, fue de manera continua, teniendo conocimiento directo de los hechos desde el año 2008 que laboró en la empresa, debemos tener en cuenta que esta declarante cuenta que ella laboraba por jornadas muy cortas con el demandado, esto era por espacio de 15 o máximo 20 días, lo que nos permite colegir que tampoco sería una testigo directa del vínculo laboral, pues sus contratos como ella mismo lo dijo eran esporádicos, y más bien lo que sabe es en razón de su relación de pareja con el demandante.

Encontrando esta Sala que esta testigo se torna parcializada, amañada y con intereses en el resultado del proceso, tanto así que su declaración fue tachada de

falsa y la misma salió avante, no lográndose acreditar con su dicho la continuidad de la relación laboral en disputa, ni los extremos pregonados.

Ahora, en lo que corresponde a la prueba documental, aduce el recurrente que el extremo inicial se puede inferir de la repuesta que diera el demandado Silvio Aristizábal al derecho de petición impetrado por su representado el 13 de febrero de 2017, encontrando esta colegiatura que de la respuesta suministrada por el demandado no se desprende esta información, pues de la misma se lee que era falso lo que exponía el actor de que había laborado con él, desde el 13 de mayo de 2000 hasta el 17 de enero de 2017, recordándole que el 16 de diciembre de 2016, de manera voluntaria había dejado el trabajo sin avisar, para irse de paseo (01.Expediente Digitalizado folios 23 a 25)

Continuando con el análisis de la prueba documental, tenemos que a folios 29 y 30 (archivo 01.Expediente Digitalizado), reposa la historia laboral del demandante, en la que se lee que del 11 de mayo al 23 de diciembre de 2005, aparece como empleador del actor el señor “Silvio Aristizábal”, lo que nos llevaría a colegir que en esos extremos existió un vínculo laboral entre las partes en disputa, sin embargo debemos tener en cuenta que estos periodo que reposan en este documento no fueron objeto de este debate probatorio, por lo que no es posible efectuar pronunciamiento al respecto sobre derechos laborales y prestaciones que se hubiesen podido configurare en ese interregno, como fue igualmente indicado por el *a quo*, y sin que al existir tales cotizaciones sea prueba de que el demandante también trabajo en los años siguientes distintos a los que se produjo la condena.

Lo anterior, nos lleva a concluir qué si bien confesó el demandado Silvio Aristizábal que el demandante trabajo un tiempo en el año 2006, con esta sola afirmación no es posible determinar que existió continuidad en la relación laboral como lo pretende el recurrente, desde el año 2006 hasta el 16 de diciembre de 2016, pues no hay prueba que acredite la continuidad de la relación laboral dentro del lapso 2007 a 2013, carga probatoria que recaía en cabeza del actor, quien debe acreditar los supuestos de hecho invocados como fundamento de la acción en los términos de los artículos 164 y 167 del C. G. del P, sin que en el caso de autos haya cumplido con su deber probatorio.

Por el contrario, si se logró acreditar la existencia de tres relaciones laborales entre las partes dentro de los ciclos 2014, 2015 y 2016, como quedó confesado por el demandado Silvio Aristizábal y como se colige de los soporte de la liquidación de las prestaciones sociales, suscritas por el demandante, documentos de los que se desprende que el primer contrato data del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2014; el segundo contrato del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2015 y el tercer contrato del 21 de septiembre al 22 de diciembre de 2016 (01.Expediente Digitalizado folios 178 a 181), no asistiéndole razón al recurrente, cuando arguye que estos extremos los dictaminó el *a quo* con las declaraciones rendidas por los testigos del demandado, pues existe soporte probatorio suficiente para llegar a estas conclusiones.

En ilación de lo anterior, esta sala concluye que no le asiste razón al demandante recurrente en lo concerniente a los extremos laborales pretendidos, de manera que, por sustracción de materia, se hace innecesario el pronunciamiento sobre los demás puntos de la apelación impetrada por el apoderado del demandante, relacionados con esta declaración.

Continuando con la revisión de los temas objeto de apelación, tenemos que el apoderado del demandante manifestó también su inconformidad respecto de la terminación del contrato, aduciendo que a su representado el empleador le terminó el contrato unilateralmente sin justa causa.

Frente a este tema, adujo el demandante en el interrogatorio de parte que, durante todo el año de 2016, le manifestó a su empleador que en el mes de diciembre iba a ir a visitar a sus padres, ya que hacía mucho tiempo no lo hacía porque no le daban vacaciones, así que una vez llegó la fecha se fue y regreso en enero 2017, manifestándole su empleador que ya no continuaría laborando con él.

De otro lado, el demandado respecto a este punto expresó en el interrogatorio de parte que, el señor Frey Molano Vargas en el mes de diciembre de 2016 dejó el puesto de trabajo y no regresó.

Así las cosas, al pregonar el accionante que se le finiquito la relación laboral, le correspondía demostrar que efectivamente fue DESPEDIDO, debiendo probar que

en efecto el empleador fue quien lo despidió, al tomar la decisión de terminar el contrato de trabajo, tema que ha sido tratado entre otras, en la sentencia SL 42544 del 28 de mayo de 2014, MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la que, respecto de la carga de la prueba del despido, preciso lo siguiente:

“...Aunque lo anterior es suficiente para desestimar el cargo, la Sala precisa que el Tribunal en momento alguno le dio un alcance equivocado al artículo 64 del C.S.T., en tanto la causa eficiente por la cual el sentenciador de alzada absolvió a la demandada de la indemnización por terminación del vínculo laboral, no fue la interpretación de la citada preceptiva, sino el hecho de no encontrar probado el despido, carga procesal que a la luz del artículo 177 del C.P.C., le correspondía al demandante, tal y como lo ha repetido esta Sala de la Corte al precisar que en materia de despidos, sobre el trabajador gravita la carga de demostrar que la terminación del contrato fue a instancia del empleador, y a éste, si es que anhela el éxito de su excepción, le corresponde demostrar que el mismo se basó en las causas esgrimidas por él, al momento de dar por terminado el vínculo laboral...”

Ciñéndonos a los anteriores presupuestos, tenemos que dentro del plenario la prueba que milita en torno al despido del actor, no logra acreditar la existencia de tal despido.

Y es que testigo SANDRA MILENA BARRERA PINEDA, frente a este punto, manifestó que su esposo se fue a pasar vacaciones donde la mamá, y cuando regresó don Silvio le dijo que ya no tenía más trabajo, situación que conoció en razón su compañero hoy demandante le contó, expresando que ella no estuvo presente en ese momento del despido, por lo que su declaración igualmente sobre este punto es de oídas y nada le aporta al litigio.

Sobre este tema también declaro el testigo GILDARDO DE JESÚS MORA RUEDA, quien manifestó que Molano dejó de trabajar en el taller porque se fue para el Huila y no dijo nada.

Valorada la prueba, es posible inferir que al demandante no le terminaron el contrato de trabajo, sino que dejó de prestar el servicio, lo que nos lleva a concluir que no existe causal alguno para predicar el despido sin justa causa por parte del empleador, como lo pretende el recurrente, lo que nos lleva a desestimar este argumento de alzada.

Ahora, respecto de los puntos de inconformidad del apoderado de los demandados, no ésta conforme con el pago de la indemnización moratoria regulada en el artículo 65 del CST, a cargo del condenado Silvio Aristizábal, manifestando que su representado siempre actuó de buena fe, pagando oportunamente la liquidación de las prestaciones sociales, una vez finalizaban los vínculos laborales con el demandante.

En lo concerniente al pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del CST, ha de señalarse que de tiempo atrás esta Sala ha venido sosteniendo que la imposición de la referida sanción moratoria no es automática, y que en razón a ello, resulta de vital importancia verificar en cada caso la conducta asumida por el empleador así como el análisis de los motivos que llevaron a que se incurriera en mora en el pago de las prestaciones sociales adeudadas a la finalización del vínculo laboral.

Así las cosas, para resolver lo que a esta instancia le compete, esto es, si existió mora injustificada en el pago de las prestaciones sociales definitivas del demandante a la finalización del vínculo laboral, se tiene que la SCL CSJ en sentencia SL11436-2016, reiteró que:

*“En cuanto a la manera como los juzgadores deben apreciar la conducta del empleador, de cara a la imposición de la sanción por mora y a la inexistencia de parámetros o reglas absolutos, esta Corporación en sentencia de la CSJ SL ,13 abr. 2005, rad. 24397, explicó: ... deben los jueces valorar ante todo la conducta asumida por el empleador que no satisface a la extinción del vínculo laboral las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse desde luego con los medios probatorios específicos del proceso que se examina...”, como lo dejó sentado en la sentencia del 15 de julio de 1994, radicación 6658. “Así, pues, en materia de la indemnización moratoria no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe. Sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro.”.*

En ilación con lo anterior, advierte esta superioridad que para condenar al pago de la sanción moratoria del artículo 65 del CST, el Juez de primera instancia argumentó que el demandado durante la vigencia de los contratos de trabajo a término indefinido en los ciclos 2014, 2015 y 2016 no afilió al sistema de seguridad social al actor, ni le



efectuó el pago de parafiscales, no existiendo una justificación ante esta omisión, pues si bien el señor Silvio Aristizábal en su interrogatorio dijo que fue el trabajador quien se opuso al pago de la seguridad social, por lo que no procedió con las respectivas afiliaciones, consideró que ese argumento que no tenía asidero, ya que el empleador era quien ponía las condiciones al momento de contratar a su personal y si éste no se acogía a sus directrices, tenía la potestad de desistir de la contratación, sin embargo, continuó con la vinculación laboral a pesar de contrariar los obligaciones laborales.

Al respecto, debemos tener en cuenta, que aunque la parte demandada no lo plantea en la apelación, el pedido en la demanda de la sanción del Artículo 65 del CST, no se fundó en no haberse pagado de forma oportuna las obligaciones con el sistema general de seguridad social durante la vigencia del contrato laboral, sino en “**...la falta de pago de los salarios y prestaciones sociales...**”, como se desprende de los fundamentos y razones de derecho introducidos en el libelo genitor, del que es posible concluir esta situación, por lo que al tratarse de una sanción la del Artículo 65 del CST, no podía el juez otorgarla bajo situaciones fácticas distintas a la solicitada, evidenciándose con las liquidaciones de los contratos de trabajo de los años 2014, 2015 y 2016 que militan a folios 178 a 181 del citado archivo digital, que el señor Silvio Aristizábal Gómez pagó oportunamente las prestaciones sociales proporcional al tiempo laborado por el actor en cada periodo del que se produjo la declaratoria del contrato de trabajo, y en cuanto a los salarios se dejó claro con la prueba testimonial y el interrogatorio de parte del actor, que el empleador era puntual con el pago de los mismos.

Por las anteriores razones, se revocará en esta instancia la decisión del *a quo* de condenar al demandado SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ al pago de la sanción moratoria del artículo 65 del CST en favor del demandante, y en su lugar se absolverá al demandado de dicha pretensión.

Ahora bien, en lo que concierne a la inconformidad respecto a la condena en costas, debemos remitirnos a la norma legal que a la fecha de la sentencia de primera instancia reglaba lo referente a la condena en costas, la cual es el Artículo 365 del CGP, norma que dispone lo siguiente:

***“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:***

***1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.***

El apoderado del demandado aduce que en este caso resultó vencido en juicio, el actor en cuanto se absolvió de las pretensiones a los codemandados, por lo que resultaría procedente una condena en costas a su cargo, asunto en el que en le asiste razón al apoderado de los codemandados MARÍA HORTENCIA VÁSQUEZ AGUDELO, LINA MARÍA ARISTIZÁBAL VÁSQUEZ Y SEBASTIÁN ARISTIZÁBAL VÁSQUEZ, pues respecto de ellos se decide en la parte resolutive del fallo de primera instancia, absolverlos de todos los cargos formulados por el actor lo que imponía condenar en costas a este a favor de aquellos demandados, por lo que se condenar al actor, a pagar a los demandados antes relacionados costas del proceso, las que deberán ser fijadas por el *a quo*, para garantizar actor la doble instancia en el caso que no este de acuerdo con el monto que se le imponga.

En lo que concierne a la inconformidad del condenado SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, en lo relativo al monto de la condena de las agencias en derecho que se dispuso en la sentencia recurrida por considerarlas muy altas, la Sala, debe manifestar, que sobre el monto de las agencias en derecho las que harán parte de las costas que finalmente se liquiden por el Secretario y se aprueben por el Juez, en su oportunidad una vez el expediente vuelva al juzgado de origen, solo es viable apelar contra el auto que apruebe la liquidación de costas que incluyen las agencias en derecho fijadas en la sentencia, pues este auto es apelable a la luz del art. 65 del CPTSS y 366 del CGP, por lo que el monto de las agencias en derecho fijadas en la sentencia de primera instancia no puede ser objeto de recurso de apelación, y por ello este aspecto no será resuelto.

Finalmente, la Sala, considera oportuno precisar en esta instancia, para evitar discusiones posteriores o inquietudes de COLPENSIONES de cómo liquidar el cálculo actuarial que pagará el demandado SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, a favor del demandante, que el mismo será liquidado por COLPENSIONES, tomando como ingreso base de cotización, el salario mínimo legal mensual vigente en los extremos

temporales en que se declaró los contratos de trabajo, es decir, entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de 2014, del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2015, y del 21 de septiembre al 22 de diciembre de 2016.

Por las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en pretendencia, la decisión de primera instancia, será confirmada, revocada, adicionada y precisada en los términos explicado en precedencia.

Costas en esta instancia a cargo del demandante y a favor del demandado SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ por haber sido vencido totalmente aquél en la apelación y haber prosperado parcialmente la apelación de este. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

## **7. DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO.** **CONFIRMAR** la sentencia del 17 de septiembre de 2020 proferida por el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor **FREY MOLANO VARGAS** contra el señor **SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ**, salvo lo referente a la condena a la indemnización moratoria del Art. 65 del CST, la que se **REVOCA** para en su lugar **ABSOLVER** a este demandado de esta prestación, conforme lo explicado en los considerandos.

Se precisa que el cálculo actuarial que pagará el demandado SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, a favor del demandante, será liquidado por COLPENSIONES, tomando como ingreso base de cotización, el salario mínimo legal mensual vigente en los extremos temporales en que se declaró los contratos de trabajo, es decir, entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de 2014, entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de 2015, y del 21 de septiembre al 22 de diciembre de 2016.

**SEGUNDO: ADICIONAR** la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar al demandante, a pagar a los demandados MARÍA HORTENCIA VÁSQUEZ AGUDELO, LINA MARÍA ARISTIZÁBAL VÁSQUEZ Y SEBASTIÁN ARISTIZÁBAL VÁSQUEZ costas del proceso, las que deberán ser fijadas por el *a quo*.

COSTAS en esta instancia a cargo del demandante y a favor del demandado SILVIO ARISTIZÁBAL GÓMEZ. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

La presente sentencia se notifica a las partes por **EDICTO**.

Vuelva el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma la providencia por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **04e4be2b46e791f918aa6f04705f81ac8b38d879dde485d2b6ab87e1f5169b12**

Documento generado en 01/06/2023 11:12:15 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**